



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial del Poder Público



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021)

SENTENCIA

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: DURLEY DEL SOCORRO ALVAREZ SÁNCHEZ
Demandadas	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
Radicado	: 05001 31 05 002 2017 00312 01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad social –Pensión sobrevivientes sumando tiempo de servicio militar obligatorio -
Decisión	: Revoca decisión absolutoria
Sentencia No	: 168

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES** (inicialmente ponente en esta Sentencia) **NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ** como ponente, luego de haberse pasado el proceso, por no aceptarse ponencia del Magistrado Lebrún Morales, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita el reconocimiento y pago de **pensión de sobrevivientes** con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Carlos Henry Betancur Roldán, desde el día **21 de agosto de 1990**, retroactivo pensional, reajustes, mesadas adicionales, **indexación**, costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que el 21 de agosto de 1990, por causas de origen común, falleció el cónyuge de la demandante, señor Carlos Henry Betancur Roldán; contrajeron matrimonio el 29 de diciembre de 1989, no obstante tener convivencia desde mucho antes; para el momento del fallecimiento, su cónyuge tenía cotizadas 150 semanas, lo que le genera el derecho; también prestó servicios al Ministerio de Defensa entre el 9 de noviembre de 1984 y el 30 de septiembre de 1986, equivalente a 97 semanas, alcanzando así 247 semanas; reclamó la pensión de sobrevivientes el 5 de septiembre de 1990, siendo negada mediante Resolución No 06895 del 8 de noviembre de 1990 y en su lugar, se le otorgó la indemnización sustitutiva conforme al artículo 24 del Decreto 3041 de 1966, teniendo en cuenta 145 semanas; tiene derecho a lo que solicita, por el número de semanas cotizadas y por lo dispuesto en la Sentencia SU769 de 2014.

Respuesta a la demanda:

COLPENSIONES aceptó el fallecimiento del señor Betancur Roldán, el matrimonio con la demandante, la reclamación formulada y la respuesta emitida; sostiene que el causante de la pensión no dejó acreditados los requisitos establecidos. Se opuso a las pretensiones formuladas y formuló las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación prestacional, cobro de lo no debido,

buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción, improcedencia de intereses moratorios y compensación (folios 43 a 50).

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Segundo Laboral** del Circuito de Medellín, mediante Sentencia, **declaró próspera la excepción de inexistencia de la obligación y absolvió a COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas en la demanda; sin condena en **Costas**.

En términos generales, consideró el Juez de Primera Instancia, que conforme a la Sentencia SU 769 de 2014 de la H. Corte Constitucional, es posible sumar tiempos públicos y privados, pero para acceder a la pensión de vejez, lo que no se da en pensión de sobrevivientes; además que el causante falleció en el año 1990, mucho antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 que trae el régimen de transición y por tanto, no le es aplicable. Así mismo, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha señalado que las normas futuras no son aplicables, sin que la Ley 100 de 1993 estableciera retroactividad alguna, Corporación que no contempla la posibilidad de sumar tiempos para acceder a pensión de vejez, con el Decreto 758 de 1990 y menos en sobrevivientes; para el año 1990, no existía la sumatoria de tiempos públicos y privados, pues no era contemplado por el Decreto 758 de 1990, por tanto, una norma posterior no puede entrar a variar esa situación legal.

Recurso de Apelación apoderado de la demandante:

Solicita se revoque la decisión y en su lugar, se acceda a lo pretendido en la demanda. Para tal propósito, invocó los artículos 53 y 230 de la Constitución Nacional, el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y los artículos 6, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990, en concordancia con lo dispuesto en las sentencias SU769 de 2014 y SU057 de 2018 de la H. Corte Constitucional. Invoca a su favor el principio de interpretación más favorable cuando existen

diferentes fuentes de interpretación y al hecho de que las sentencias de la H. Corte Constitucional, por parte alguna limitan la sumatoria de tiempos públicos y privados, a la pensión de vejez; debiéndose tener en cuenta el tiempo de servicio militar obligatorio, donde sacrificó varios años de su vida prestando este servicio al Estado (Min. 1:31.00, CD folio 57).

Alegatos de conclusión:

La apoderada de **COLPENSIONES**, expone en términos generales, que no es procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada, toda vez que ya se reconoció la indemnización sustitutiva y no es procedente el pago de dos prestaciones provenientes del tesoro público, además, las semanas utilizadas para su liquidación, no pueden volver a ser utilizadas para ningún otro efecto. Anota que los efectos de la Sentencia SU 769 de 2014, refiere a la pensión de vejez y no de sobrevivientes, sin que sea posible acumular semanas con tiempos de servicio en el sector público.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación; de conformidad con lo establecido de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto Jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, consiste en verificar si hay lugar a revocar la Sentencia absolutoria de Primera Instancia; analizándose si el afiliado fallecido señor Carlos Henry Betancur Roldán, dejó acreditado el requisito de semanas cotizadas, y si se puede sumar tiempo de prestación de servicio militar, para causante fallecido en el año 1990, para que la demandante señora Durley del Socorro Álvarez Sánchez, en calidad de cónyuge sobreviviente - en caso de acreditar su condición de beneficiaria -, tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Encontrando esta Colegiatura procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

En forma unánime y reiterada, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha establecido que en principio, **la normatividad que rige la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del deceso del causante afiliado o pensionado, ver Sentencia SL701 del 4 de marzo de 2020** (a no ser que cumpla con los requisitos en aplicación del principio de la *Condición más beneficiosa*).

Al haber fallecido el asegurado Carlos Henry Betancur Roldán el **día 21 de agosto de 1990** (Registro Civil de Defunción folio 7), la normatividad aplicable es el **artículo 25 del Decreto 758 de 1990** (vigente desde el 18 de abril del mismo año)¹, que para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes causada por

¹ “...**ARTÍCULO 25. PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN.** Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:

a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y,

muerte de origen no profesional, remite a los requisitos para la pensión de invalidez por riesgo común, consagrados en el **artículo 6º** de la misma norma, según el cual, se exige haber cotizado **150 semanas de cotización**, para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V. M., **dentro de los seis (6) años anteriores** a la invalidez **o 300 semanas de cotización, en cualquier época**:

“...ARTÍCULO 6º. REQUISITOS DE LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:

a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,

b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez...”

Según historia laboral aportada con la demanda, generada el 8 de noviembre de 2016, el afiliado **cotizó 142.14 semanas, entre el 21 de enero de 1987 y el 21 de agosto de 1990** (folio 14); conforme a la Resolución No 06895 del 8 de noviembre de 1990, mediante la cual se reconoció indemnización sustitutiva a la demandante en calidad de cónyuge, **el entonces I.S.S. reconoció 145 semanas cotizadas** (folio 9); por tanto, -en principio- **no se cumple con el requisito de haber cotizado 300 semanas en cualquier época y tampoco 150 semanas en los seis (6) años anteriores a la muerte**, como lo exige la norma antes citada.

Observándose en el presente caso, que se aportó con la demanda, **Certificado de Información Laboral para Bono Pensional**, de fecha 9 de agosto de 2016, expedido por el **Ministerio de Defensa Nacional**, según el cual, **el señor Carlos Henry Betancur Roldán**, tuvo vinculación con la entidad del **9 de noviembre de 1984 al 30 de septiembre de 1986**, como **Soldado en el Ejército Nacional, sin cotización a la seguridad social**, tiempo equivalente a **98.71 semanas** (folios 21 a 24). Tiempo este que no fue tenido en cuenta, para verificar

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento...”

el cumplimiento de requisitos, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Es así como, **COLPENSIONES al resolver sobre la pensión de sobrevivientes** reclamada por la demandante el día 5 de septiembre de 1990, mediante Resolución No 06895 del 8 de noviembre de 1990 (folio 9), concluyó que se reunían los requisitos, pero para reconocer la indemnización sustitutiva.

Considerando el Juez de Primera Instancia, que conforme a jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y de la H. Corte Constitucional, solo se permite sumar el tiempo de servicio militar para el reconocimiento de pensión vejez y en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral, en su mayoría, que en este caso, hay lugar a una interpretación similar, a la que ha efectuado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y la H. Corte Constitucional, para tenerse en cuenta en esta pensión de sobrevivientes, el tiempo de servicio militar obligatorio del causante, veamos:

El artículo 101 del Decreto 1950 de 1973 – vigente para la época en que el afiliado fallecido prestó el servicio militar obligatorio -, señalaba que “...*El tiempo de servicio militar será tenido en cuenta para efectos de cesantía, pensión de jubilación o de vejez y prima de antigüedad, en los términos de la ley...*”. (Negritas fuera de texto).

Por su parte, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 indicaba “...*Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos: a. En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley...*”. (Negritas fuera de texto).

A su vez, el **artículo 45 de la Ley 1861 de 2017** establece:

“...ARTÍCULO 45. DERECHOS AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:

a) En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüedad en los términos de la ley.

Los fondos privados computarán el tiempo de servicio militar para efectos de pensión de jubilación de vejez y pensión de invalidez...” (Negritas fuera de texto).

Al respecto, la jurisprudencia de la **Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL11188 de 2016 Radicado 47354**, indicó que aunque el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 solo hace referencia a que el tiempo de servicio militar se computa para pensión de vejez, debe entenderse que también cubre las pensiones de sobrevivientes e invalidez, ya que en el marco de las prestaciones fundamentales del sistema de seguridad social, **las interpretaciones normativas que realicen las instituciones y los jueces, deben atender, primordialmente, a dos principios: (i) pro homine**, en cuya virtud el intérprete debe acoger el sentido más extensivo de un texto normativo, cuando se trata de la realización y efectivización de derechos fundamentales; **y (ii) de integralidad**, conforme al cual, la seguridad social brinda «cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población» conforme al artículo 2º de la Ley 100 de 1993; veamos:

“...no puede pasarse por alto que en el marco de las prestaciones fundamentales del sistema de seguridad social, las interpretaciones normativas que realicen las instituciones y los jueces, deben atender, primordialmente, a dos principios: (i) pro homine, en cuya virtud el intérprete debe acoger el sentido más extensivo de un texto normativo, cuando se trata de la realización y efectivización de derechos fundamentales; y (ii) de integralidad, que presupone que la seguridad social brinda «cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población» (art. 2º L. 100/1993). Lo anterior quiere decir que las lagunas axiológicas que susciten los textos normativos, cuandoquiera que éstos se enfrenten a problemas de incompatibilidad entre su contenido y determinados valores o principios de un sistema, como ocurre en este asunto, donde se presenta una divergencia entre el art. 40 de la L. 48/1993 y los principios fundantes del sistema general de seguridad social, deben resolverse a través de un ejercicio hermenéutico amplio o extensivo. Desde este punto de vista, a juicio de la Sala, la mejor solución interpretativa es aquella según la cual el art. 40 de la L. 48/1993, no solo cubre las pensiones de jubilación o vejez, sino también las de sobrevivencia e invalidez, en el entendido que la protección en pensiones que ofrece la L. 100/1993 abarca tres ámbitos: vejez, invalidez y muerte; de manera que, no es apropiado limitar la norma a solo uno, como si el ser humano pudiera fraccionarse en su integridad...”

Por su parte, la H. Corte Constitucional en Sentencias T 300 del 28 de junio de 2019, T 477 del 11 de diciembre de 2018 y T 124 del 28 de febrero de 2017, indicó que las semanas cotizadas en el régimen pensional y el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, deben computarse como válidos para el trámite de pensión en cualquiera de sus modalidades, sobrevivientes, vejez o invalidez; independiente si la persona se encuentra o no en transición, si está en un régimen especial o en el general, siendo la administradora de pensiones a la que se encuentre afiliado al momento de la contingencia, la que defina el derecho sumando ese tiempo, correspondiéndole adelantar los tramites respectivos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la respectiva liquidación del bono pensional o cuota parte de los pagos a la seguridad social, por el tiempo en que el afiliado prestó servicio militar obligatorio, cuya base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo actual vigente; señaló que **al ser un servicio prestado al Estado debe haber compensación especial por dicha labor** y que desconocer esa tarea encomiable que se ha ejecutado por parte de los ciudadanos, sería reñir con el principio de solidaridad que debe regir el derecho a la seguridad social; los siguientes son apartes de la Sentencia T 477 de 2018:

“...Esta Corte ha decantado la posibilidad de computar las semanas cotizadas en el régimen pensional, y el tiempo prestado en el servicio militar, independientemente de (i) si las personas se encuentran o no en transición, (ii) si están en regímenes especiales o los previstos por la Ley 100 de 1993, además, (iii) la sumatoria procede tanto para adquirir pensiones de sobrevivientes, vejez o invalidez, y (iv) debe ser el fondo o administradora de pensiones en la que se encuentre afiliada la persona al momento de la contingencia, la que defina el derecho sumando el tiempo en que se prestó servicio militar y podrá solicitar a la nación, a través del Ministerio de Defensa Nacional o de Hacienda y Crédito Público, la cuota parte correspondiente a dicho tiempo de servicio con base en el salario mínimo actual vigente...”

(...)

El tiempo de prestación del servicio militar obligatorio podrá computarse a efectos de acceder a la pensión de invalidez y será beneficiario de la misma quien i) se encuentre afiliado al Sistema en cualquiera de los regímenes pensionales; ii) sea declarado inválido, por causa de origen no profesional, con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%; iii) en caso de declaratoria de invalidez, si esta fue causada por enfermedad, haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, iv) si la invalidez fue causada por accidente que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma; v) habrá lugar a computarse el tiempo de prestación del servicio militar como semanas efectivamente cotizadas al Sistema; vi) la base de cotización de la pensión no podrá ser inferior al monto del salario mínimo legal mensual vigente...” (Negritas fuera de texto).

En la **Sentencia T-510 de 2014** señaló que la prerrogativa prevista en el **artículo 40 de la Ley 48 de 1993** tiene una **vocación de aplicación general y universal**, por lo que **cobija a todo ciudadano que haya prestado el servicio militar**, pues lo contrario implica vulneración al derecho a la igualdad, ya que estaría otorgando un trato distinto, sin una razón objetiva y razonable que así lo justifique; **quedando a cargo de la Nación la obligación de realizar directamente el aporte al régimen pensional que haya sido elegido por el ciudadano**; en los siguientes términos:

“...se tiene que el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 debe ser aplicado frente a pensiones que se rigen por el principio de cotización efectiva, en la medida en que si bien el principio de sostenibilidad financiera resulta central en la regulación del sistema de pensiones, no puede restringirse injustificadamente los derechos de los ciudadanos, por cuanto, se reitera que:

*i) **La prerrogativa prevista en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 tiene una vocación de aplicación general y universal, por lo que cobija a todo ciudadano que haya prestado el servicio militar.***

*ii) **No reconocer el tiempo de servicio militar para efectos pensionales cuando estos dependen de sus cotizaciones es una distinción cuyo origen subyace en el régimen pensional al cual se encuentra afiliada la persona, lo cual supondría una violación del derecho a la igualdad, pues se estaría otorgando un trato distinto, sin una razón objetiva y razonable que así lo justifique.***

iii) El hecho de computar las semanas correspondientes a la prestación del servicio militar, con el propósito de reconocer una pensión al amparo de lo previsto en la Ley 100 de 1993 o de otro régimen especial que exija la efectiva realización de una cotización (vía régimen de transición), supone la obligación a cargo de la Nación de realizar directamente el aporte al régimen pensional que haya sido elegido por el ciudadano...” (Subrayas son del texto, las negrillas no).

Así las cosas, en este caso, hay lugar a aplicar la jurisprudencia anterior, siendo procedente, **sumar a las 145 semanas de cotización** reconocidas por el entonces I.S.S. en la Resolución No 06895 de 1990 (folio 9), **el tiempo de servicio militar obligatorio con el Ejército Nacional equivalente a 98.71 semanas** (folios 21 a 24), con lo cual, el causante **completa 243.71 semanas en los seis (6) años anteriores a la muerte**, esto es, **entre el 21 de agosto de 1984 y el mismo día y mes de 1990**; acreditando el requisito de semanas exigido en el Decreto 758 de 1990 (150 semanas en los seis (6) años anteriores a la muerte), para dejar causada la pensión de sobrevivientes en favor de quien acredite la calidad de beneficiario.

Sobre el requisito de la convivencia, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SL100 de 2020 Radicado 67800, reiterando CSJ SL1015-2018 y CSJ SL4099-2017, indicó que la pensión de sobrevivientes no emerge de la sola acreditación del vínculo matrimonial o de hecho, que las reclamantes aseguren haber tenido con el fallecido, pues jurisprudencialmente se ha sostenido que “...tanto al cónyuge como al compañero permanente les es exigible el presupuesto de la convivencia efectiva, real y material, por el término establecido en la ley, por lo que no basta con la sola demostración del vínculo matrimonial, para tener la condición de beneficiario...”.

Anotándose que de perderse esa vocación de convivencia, **al desaparecer la vida en común de la pareja o su vínculo afectivo, se deja de ser miembro del grupo familiar del otro y bajo esas circunstancias igualmente deja de ser beneficiario de su pensión de sobrevivientes;** convivencia que debe corresponder a una comunidad de vida estable, permanente y firme, forjada en el amor responsable, la ayuda mutua, el afecto, apoyo económico, asistencia solidaria y acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de un proyecto de vida en pareja responsable y estable; **excluyendo los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos o relaciones que pese a ser prolongadas, no reúnen las condiciones para una comunidad de vida.** Ver Sentencias de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia SL1399 de 2018 Rad. 45779, SL 15932 de 2017 Rad. 53212, SL 16949 de 2016 Rad. 46478, SL 12442 de 2015 Rad. 47173.

Así mismo, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha precisado de manera reiterada y pacífica, que los beneficiarios de la indemnización sustitutiva contemplada en el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, son los mismos a los que se refiere el artículo 47 ibídem; al respecto ver, Sentencias SL 2114 del 2 de junio de 2020 Radicado 78963, SL 3879 del 4 de septiembre de 2019 Radicado 64872, SL 1643 del 30 de abril de 2019 Radicado 61772, SL 4531 del 6 de agosto de 2019 Radicado 6832, SL 2152 del 30 de abril de 2019 Radicado 66866, entre otras.

En el asunto bajo estudio, se aportó copia de **registro civil de matrimonio** contraído entre la demandante Durley del Socorro Alvarez Sánchez y el fallecido señor Carlos Henry Betancur Roldán, celebrado el **29 de diciembre de 1989**, sin constancia de haber cesado sus efectos civiles (folio 8). Rindieron declaración las señoras Shirley del Socorro Arias Garzón, Orfelina Álvarez De Piedrahita (vecinas de toda la vida) y Aracelly Arias de Tejada (vecina desde hace muchos años), quienes manifestaron haber conocido a la pareja en el vecindario, afirmando que la demandante y el causante iniciaron la convivencia como pareja, desde el año 1984, cuando el señor Carlos Henry se fue a prestar el servicio militar en el Ejército Nacional y cada vez que salía a licencia, llegaba a la casa de su compañera Durley del Socorro, conviviendo entre 4 y 5 años, hasta cuando contrajeron matrimonio, vínculo que perduró hasta la muerte del señor Carlos, en el año 1990, víctima de un accidente de tránsito en la Carrera 80 de Medellín; expusieron que el matrimonio se realizó en la Parroquia de Belén Los Alpes en Medellín y vivían en el barrio Zafra; eran conocidos en sociedad como esposos, no procrearon hijos, el esposo de la demandante laboraba en Coltejer y era quien se hacía cargo de las necesidades del hogar; sin que la pareja se hubiera separado.

Conforme a lo anterior, están demostrados los hechos y requisitos exigidos en la normatividad y jurisprudencia citados, que dan lugar a declarar como consecuencia jurídica, que la demandante, en calidad de cónyuge supérstite y beneficiaria, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, causada por el fallecimiento del señor Carlos Henry Betancur Roldán, hecho ocurrido el día 21 de agosto de 1990.

Por tanto, esta Sala de Decisión Laboral **revocará** la Sentencia absolutoria de Primera Instancia y en su lugar, **condenará** a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes solicitada.

Es de anotarse que conforme a la jurisprudencia citada de los órganos de cierre en la especialidad Laboral y en la Jurisdicción Constitucional, **la entidad de seguridad social queda facultada para solicitar a la Nación, a través del**

Ministerio de Defensa Nacional o de Hacienda y Crédito Público, la cuota parte correspondiente al tiempo de servicio militar tenido en cuenta, sin que la base de cotización pueda ser inferior al SMLMV.

Prescripción y disfrute de la pensión de sobrevivientes:

Tratándose de una prestación periódica, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha indicado que **el término de prescripción se debe contabilizar con respecto a cada una**, existiendo la posibilidad de reclamar de manera individual y sucesivamente por cada prestación (SL 1052 de 2021 Radicado 64664).

La prestación reclamada se causó el **21 de agosto de 1990**, se presentó **reclamación el día 5 de septiembre de 1990** (folio 9), interrumpiéndose el término de prescripción, hasta el **8 de noviembre de 1990**, cuando la entidad emitió el acto administrativo reconociendo la indemnización sustitutiva (folio 9) y contaba con tres (3) años para demandar, hasta el **mismo día y mes de 1993**, lo cual no realizó. Presentó una **segunda reclamación administrativa el día 21 de febrero de 2017** (folio 28) y presentó la demanda el día **25 de abril del mismo año** (folio 6).

De acuerdo a lo anterior, **es procedente conceder el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales, a partir del 21 de febrero del año 2014**, quedando afectadas por prescripción las que se hubieren causado con anterioridad, por haber transcurrido más de tres (3) años sin que se hubieran reclamado, conforme a lo señalado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Valor y número de mesadas:

Para el valor de la mesada deben atenderse los parámetros señalados en los artículos 20 y 28 del Decreto 758 de 1990², pero en este caso **será equivalente al SMLMV** de cada anualidad, atendiendo al valor del ingreso base de cotización. **Con derecho a 14 mesadas al año, pese a haberse causado el 21 de agosto de 1990** –cuando no existía la mesada 14-, toda vez que:

La mesada 13 fue creada con el **artículo 5 de la Ley 4 de 1976**; con el **artículo 142 de la Ley 100 de 1993 se creó la mesada 14 solo para pensiones reconocidas y causadas antes del 1º de enero de 1988**, norma que fue declarada inexecutable, mediante Sentencia **C 409 de 1994** donde la H. Corte Constitucional señaló que se deduce "*...una clara violación a la prohibición de consagrar discriminaciones en el mismo sector de pensionados, otorgando privilegios para unos en detrimento de los otros, al restringir el ejercicio del derecho a la misma mesada adicional sin justificación alguna, para aquellos pensionados jubilados con posterioridad al 1o. de Enero de 1988...*". Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia **SL 1349 del 10 de abril de 2019**, al analizar una pensión restringida de jubilación aplicando Ley 33 de 1985, indicó que **si bien el actor causó la pensión de jubilación el 16 de octubre de 1991**, esto es, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 que fue la que creó la mesada adicional de junio, lo cierto es que **la Corte Constitucional al declarar la inexecutable de sus limitantes, extendió tal derecho a todos los pensionados y, en esa medida, quedaron cobijadas incluso aquellas anteriores a dicha data.**

Retroactivo pensional:

² ARTICULO 15. La pensión mensual de invalidez, o la de vejez se integrarán así:

a. Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base, y
b. Con aumentos equivalentes al uno y dos décimos por ciento (1.2%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización.

El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33 la ciento cincuentava parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó en las últimas ciento cincuenta semanas de cotización.

ARTICULO 21. La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de lo que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los aumentos dispuesto en el artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno.

Realizados los cálculos correspondientes, Colpensiones deberá pagar a la demandante la suma de **\$75.961.511** por concepto de retroactivo pensional, liquidado desde el **21 de febrero de 2014**, hasta el **31 de mayo de 2021**.

A partir del **1º de junio de 2021**, COLPENSIONES deberá continuar pagando a la demandante la pensión de sobrevivientes, en cuantía equivalente al **SMLMV**, con derecho a 14 mesadas al año, sin perjuicio de los incrementos legales. Se anexa liquidación de retroactivo pensional.

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	No mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2014	12 mesadas y 10 días	\$ 616.000	\$ 7.597.333
2015	14	\$ 644.350	\$ 9.020.900
2016	14	\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	14	\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	14	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	5	\$ 908.526	\$ 4.542.630
TOTAL			\$ 75.961.511

Intereses moratorios:

No fueron solicitados en la demanda y tampoco hay lugar a su **reconocimiento**, teniendo en cuenta que en su momento, COLPENSIONES negó la prestación económica conforme a lo preceptuado en la normatividad aplicable al caso concreto y en este proceso, se reconoce la prestación conforme a jurisprudencia las Altas Cortes generada en forma posterior a la muerte del afiliado.

Indexación:

Siendo procedente el **reconocimiento y pago de la indexación de las condenas**, ya que constituye un factor que compensa la pérdida de valor real

de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, dado que en países inflacionarios como el nuestro, se pierde con el transcurso del tiempo el poder adquisitivo de la moneda; si bien es cierto, el retroactivo pensional reconocido tiene un elemento de actualización legal, por los aumentos que se realizan anualmente conforme al IPC causado en el año anterior, no es menos cierto que esta actualización anual, no exonera a la entidad de la corrección monetaria, que se genera cuando se debe una suma de dinero y no es pagada, debiendo estar a disposición del beneficiario de la pensión, como en este caso.

Por lo tanto, se condenará a la indexación de los valores reconocidos a favor de la demandante, desde la fecha en la que debió realizarse el pago de cada mesada pensional, hasta la fecha en que se haga efectiva su cancelación, de acuerdo con la certificación del DANE sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor. Aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Indexación} = \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$$

Descuentos en salud:

Se autorizará a Colpensiones a descontar del valor del retroactivo pensional reconocido, las cotizaciones en salud que correspondan en los términos legales, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 inciso 2 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 42 inciso 3° del Decreto 692 de 1994 y previsiones del artículo 69 del Decreto 2353 de 2015, lo indicado por la **H. Corte Constitucional en la Sentencia SU 230 de 2015** y reiterados pronunciamientos de la **Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, entre otras, Sentencias **SL1338 de 2020 Rad. 64254, SL522 de 2018 Rad. 66940 y SL7911 de 2015 Rad. 5757**, en las que ha precisado que una vez surge el status de pensionado, por ministerio de la ley surge la obligatoriedad de las entidades pagadoras de pensiones de descontar la cotización para el sistema de salud.

Compensación:

Prospera la excepción de compensación propuesta por COLPENSIONES, por tanto, **se autorizará a la entidad demandada para que del retroactivo pensional reconocido, descuente el valor pagado a la demandante por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, debidamente indexado.**

COSTAS:

No se condena en costas en Segunda Instancia, al haber prosperado el recurso de apelación formulado por el apoderado de la demandante, conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso y el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **REVOCA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas que por vía de Apelación se revisa; en su lugar, se **DECLARA** que la demandante señora **DURLEY DEL SOCORRO ALVAREZ SÁNCHEZ C.C. 42.759.304**, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990

aprobado por el Decreto 758 de 1990, computando el tiempo de servicio militar obligatorio y las cotizaciones efectivamente realizadas al Régimen de Prima Media con Prestación Definida; con disfrute a partir del **21 de febrero de 2014**, en cuantía equivalente al **SMLMV, con 14 mesadas al año**, sin perjuicio de los incrementos legales; en consecuencia, se **CONDENA** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, a reconocer y pagar a la demandante:

a) La suma de **\$75.961.511** por concepto de retroactivo pensional, liquidado desde el **21 de febrero de 2014** hasta el **31 de mayo de 2021**, ambas fechas inclusive.

b) A partir del **1º de junio de 2021**, COLPENSIONES deberá continuar pagando a la demandante la pensión de sobrevivientes, en cuantía equivalente al **SMLMV**, con derecho a **14 mesadas al año**, sin perjuicio de los incrementos legales.

c) Se **CONDENA** a **COLPENSIONES** a pagar la **indexación** de las mesadas pensionales reconocidas, desde la fecha en la que debió de hacerse el pago de cada una de ellas, hasta la fecha en que se haga efectiva su cancelación, de acuerdo a la certificación del DANE sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor y a la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia.

Todo lo anterior, de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Se **AUTORIZA** a **COLPENSIONES**, a descontar del retroactivo pensional reconocido, **las cotizaciones en salud que correspondan en los términos legales**; conforme a lo expresado en la parte motiva.

TERCERO: Se **AUTORIZA** a **COLPENSIONES** para que del retroactivo pensional reconocido, **descuente el valor pagado** a la demandante **por concepto de indemnización sustitutiva** de la pensión de sobrevivientes, **debidamente indexado**; según se explicó en los considerandos.

CUARTO: No se condena en Costas en Segunda Instancia; según lo indicado en la parte motiva.

QUINTO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020) y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

Salvamento de voto

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
Estados No **113** del **30 de junio de 2021**

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente, manifiesto que me apartó de la determinación tomada por la Sala Mayoritaria en este evento. En mi criterio, derivado del análisis conjunto de la normatividad pertinente y aplicable al caso, debió confirmarse la decisión absolutoria de primer nivel, pues no es posible el reconocimiento judicial de la pensión de sobrevivientes que se pretende, al amparo de los siguientes argumentos:

No fue asunto de controversia, entre otros hechos, el que la demandante fue la cónyuge de Carlos Herny Betancur Roldán (fl. 8); que aquél falleció el 21 de agosto de 1990 por causas de origen común (fls. 7 y 9); que para dicho momento se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales (fl. 11); y que la demandante reclamó la pensión de sobrevivientes al Instituto de Seguros Sociales, y en su lugar se le concedió la indemnización sustitutiva (véase fl. 9).

Coincido con la mayoría, en que la normatividad a aplicar es la vigente para la fecha de la muerte del afiliado, esto es, la contenida en el Acuerdo 049 de 1990, que en su artículo 25 dispone:

Artículo 25. PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:

a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y,

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento.

Y el artículo 6 del mismo estatuto, al regular lo relativo a número y densidad de cotizaciones de la pensión de invalidez de origen común, establece:

Artículo 6. REQUISITOS DE LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:

*...
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.*

Con esa base reglamentaria, debieron examinarse las distintas pruebas documentales, para concluir que Betancur Roldán para la fecha de su fallecimiento, no tenía cotizadas 150 semanas al Instituto de Seguros Sociales en los últimos 6 años y, mucho menos, 300 en cualquier época. En efecto, si se repara en la Resolución 06895 de 1990 del ISS, por medio de la cual se le reconoció la indemnización sustitutiva, se aceptan en total 145 semanas cotizadas, y el obrante a folios 14 solo da cuenta de 142.14 semanas; el *“INFORME DE COTIZACIONES FACTURADAS”* a folios 10, aunque refiere 150 semanas facturadas, tiene 5 semanas simultáneas, concretamente para el ciclo 87-4, en tanto aparecen con los empleadores *QUIMICOL LTDA.* y *SERVINDUSTRIA S.A.*, las cuales nunca puedan sumar 10, al tenor de lo establecido en el artículo 81 del Acuerdo 044 de 1989, que dispone en su inciso primero: *“Artículo 81. COTIZACIONES CON VARIOS PATRONOS. En los casos en que un trabajador hubiere prestado servicios en forma simultánea con varios patronos, los diferentes aportes serán tenidos en cuenta para establecer el promedio del salario de base correspondiente, para efectos del pago de las prestaciones económicas, sin que sobrepase el salario base máximo asegurable al momento de causarse el derecho”*. Sobre esta materia, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 5 de junio de 2012 (Rad. 42299), sostuvo:

De tal modo que independiente de que los aportes que reclama la censura estuvieran o no en mora, lo cierto es que no es dable sumarlos al total de semanas cotizadas, habida cuenta que el ISS subroga el riesgo por un mismo período y no por tiempos dobles. Por tanto, en los eventos de servicios prestados por el asegurado en forma simultánea a varios empleadores, los diferentes aportes se tienen en cuenta únicamente “para establecer el promedio del salario de base correspondiente, para efectos del pago de las prestaciones económicas, sin que sobrepase el salario base máximo asegurable al momento de causarse el derecho” conforme lo dispone el artículo 81 del Acuerdo 044 de 1989 aprobado por el Decreto 3063 del mismo año, es decir, incrementa el ingreso base de cotización más no aumenta el tiempo de cotización o semanas aportadas.

Y en cuanto a la posibilidad de sumar al anterior número de semanas, el tiempo laborado para la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, de manera específica el transcurrido entre el 9 de noviembre de 1984 y el 30 de septiembre de 1986 (fl. 22), hecho ajeno a toda controversia, con sustento en el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU769 de 2014, baste simplemente decir, entre otras razones: 1) que tal sumatoria solo opera para la pensión de vejez dándole aplicación al régimen de transición pensional, y 2) que la norma concreta y específica de la pensión de invalidez, que aplica para la pensión de sobrevivientes, es enfática en

exigir estas cotizaciones para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, a diferencia de lo estatuido en el artículo 12 cuando reglamenta la pensión de vejez. Al estudiar un caso de semejantes contornos al presente, concretamente el de MARIA AURA ALICIA VÉLEZ DE ATEHORTÚA contra COLPENSIONES, en decisión del 13 de septiembre de 2018 (Rad. 05001-31-05-2016-0702-01), se sostuvo:

El artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 dice en su literal A que “Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos: a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común [...]”, consagrando así el artículo 6° del mismo Acuerdo los requisitos para causar la pensión de invalidez: “Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones: b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”. Respecto a este requisito de densidad de semanas se circunscribe entonces el principal punto de inconformidad planteado, toda vez que el juez de primera instancia encontró que el mismo no se cumplió a cabalidad.

Se tiene aquí que el causante cotizó en toda su vida laboral ante dos entidades, en un primer momento, entre el 06 de abril de 1967 y el 31 de marzo de 1974, prestó sus servicios al Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que estuvo afiliado a CAJANAL logrando cotizar así un aproximado de 364 semanas (fls. 26/30); y en un segundo momento estuvo afiliado al ISS, hoy Colpensiones, conservando su calidad de afiliado de dicha entidad hasta el momento de su muerte y habiendo cotizado ante esta entidad un total de 77,57 semanas entre el 07 de abril de 1975 y el 30 de septiembre de 1976 (fl. 24).

Revisando solo las semanas que cotizó el causante para el riesgo de muerte ante el ISS (hoy Colpensiones), se tiene que efectivamente no reúne las 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al momento de su muerte ni las 300 semanas en cualquier tiempo, por lo que la demandante en el libelo petitorio solicita se aplique la sentencia SU-769 de 2014 de la Corte Constitucional, solicitud que esta Sala no encuentra posible, toda vez que en el caso de autos se habla de una pensión de sobrevivientes y dicho pronunciamiento hace referencia específicamente a la posibilidad de sumar el tiempo laborado al servicio del sector público y las semanas de cotización ante el ISS para efectos de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no siendo posible aplicarlo en materia de pensión de sobrevivientes, no solo porque la que aquí se reclama tiene como fundamento normatividad diferente, la cual exige un número de cotizaciones preciso al SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE, ajeno por completo al del Sistema General de Pensiones que consagró la Ley 100 de 1993, sino porque al tratarse de prestaciones que buscan proteger contingencias diferentes, la normatividad que las regula no es comparable. Para reafirmar el hecho de que dicho precedente hace referencia únicamente a la pensión de vejez se hace necesario citar un aparte del mismo:

“Independientemente del régimen sobre el cual se hayan realizado estos pronunciamientos, se trata de una interpretación que busca proteger los limitantes sobre las garantías de los trabajadores y por lo mismo deben ajustarse a cualquier régimen sobre el cual exista duda respecto a si deben tenerse en cuenta las semanas no aportadas por la entidad pública para efectos de los derechos pensionales.

En suma, para el reconocimiento de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les apliquen los requisitos contenidos en el

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible realizar la acumulación de los tiempos en cajas o fondos de previsión social cotizados o que debieron ser cotizados por las entidades públicas, con aquellos aportes realizados al seguro social. Lo anterior, porque indistintamente de haberse realizado o no los aportes, es la entidad pública para la cual laboró el trabajador la encargada de asumir el pago de los mismos (Negrilla fuera de texto).

9. Conclusiones.

9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para acceder a la pensión de vejez. (Negrilla fuera de texto).

De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.

9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.

9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga prestacional”.

Por ello, sin discusión alguna, se concluye que el señor Jaime Atehortúa Rodríguez para el momento en que falleció: 17 de marzo de 1993, no cumplió con los requisitos necesarios para dejar causada la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante o cualquier otro miembro de su grupo familiar, motivo por el cual la decisión de primera instancia se habrá de CONFIRMAR en su integridad, incluido lo relativo a las costas, sin que sea del caso estudiar los otros motivos de inconformidad planteados por el recurrente, entre otras razones por su naturaleza consecencial.

Atendiendo lo antes dicho, y como las razones expuestas por el fallador de primer grado coinciden con las que se dejan expuestas, sobran consideraciones para concluir que el fallo recurrido debió haber sido confirmado. En mi sentir, no era necesario referirse al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución, pues no se advierte la existencia de dos normas que regulen la materia, o una interpretación diferente a la que la misma Corte Constitucional expone con amplitud en la sentencia de unificación antes referida; o a los artículos

230 ibídem o 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues estas disposiciones no le permiten al interprete establecer o crear reglas por fuera de los mandatos legales so pretexto del reconocimiento de derechos prestacionales de la seguridad social.

Con toda consideración, el magistrado,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES